

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**RAMA JUDICIAL**

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**

Medellín, dieciocho (18) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Apelación auto

Exp. 05001-31-05-007-2021-00100-01

Vencido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, se decide el recurso de apelación interpuesto por ADRIANA LUCÍA LOAIZA GALVEZ, frente al auto que decidió declarar próspera la excepción previa de “FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA FRENTE A LA PRETENSIÓN DE PENSIÓN DE INVALIDEZ” dentro del proceso ordinario laboral que adelanta en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES- (Rad. 05001-31-05-007-2021-00100-01).

**ANTECEDENTES:**

La promotora convocó a juicio a Colpensiones, con la finalidad de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes de cuenta del fallecimiento de su hermana Margarita María Loaiza Gálvez, quien venía disfrutando de la prestación por muerte con ocasión de la muerte de su padre Julio Ernesto Loaiza Osorio, junto con los intereses moratorios y las costas del proceso.

Colpensiones en defensa de sus intereses, dentro de su escrito de oposición formuló como excepción previa la de “FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA FRENTE A LA PRETENSIÓN DE

PENSIÓN DE INVALIDEZ”, argumentando que teniendo en cuenta que Margarita María Loaiza no era afiliada sino beneficiaria de una pensión de sobrevivientes que dejó causada su padre, es claro que el causante original es el señor Julio Ernesto Loaiza Osorio de quien pretende hoy la prestación la demandante, sin que en ese sentido y bajo ese contexto se haya permitido a Colpensiones pronunciarse previo al trámite judicial sobre la prestación, en tanto los formularios estaban dirigidos a obtener una prestación de cara a la muerte de la señora Margarita Loaiza, con respuesta negativa de la administradora por carencia de registros al respecto, solicitando la abstención del estudio del presente proceso por no cumplirse con el requisito de procedibilidad y por ende, carecer de competencia para conocer de dicha pretensión.

El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, en decisión que profirió el 19 de abril de 2023 dentro de la audiencia del artículo 77 del CPTSS, DECLARÓ probada la excepción previa dando razón a los argumentos de la convocada y dispuso la terminación del proceso sin condena en costas.

La activa se apartó de esa determinación aduciendo que a través de correo certificado se remitieron los formularios a la entidad donde se solicitó la sustitución pensional (Pág. 69 Archivo inicial), fueron cotejados por la entidad, en ese formulario se esboza en la parte superior que se marca sustitución pensional y se anexó información de EPS, declaración de no pensión, solicitando en virtud del dictamen emitido que acredita la PCL y las declaraciones extra juicio el reconocimiento de la sustitución. Indica que si bien en el hecho segundo de la demanda se alude al reconocimiento de la pensión con ocasión a la muerte de Margarita que a su vez sustituyó la de su padre Julio Ernesto, no es óbice para interpretar que lo que se busca es que se reconozca la pensión de sobrevivientes desde la muerte del progenitor, lo que se deriva del acápite de pretensiones, cuya lectura da cuenta de la intención de obtener una prestación por muerte (Min 29:31).

La directora del proceso reafirmó su postura inicial y en ese orden concedió el recurso vertical en el efecto suspensivo.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

### CONSIDERACIONES:

Sea lo primero aclarar que la providencia cuestionada, es susceptible de la alzada conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 65 del CPTSS, según el cual, es apelable el auto que decida sobre excepciones previas, en coherencia con lo que regula el artículo 6º del Código Adjetivo Laboral.

En ese orden, debe analizarse por la Sala si en esta oportunidad puede colegirse satisfecho o no el requisito a que alude el mencionado artículo 6º, disposición que señala:

*“Artículo 6º. Reclamación administrativa. Las acciones contenciosas contra La Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra entidad de la administración pública, sólo podrán iniciarse cuando se haya agotado la reclamación administrativa. Esta reclamación consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda, y se agota cuando se haya decidido o cuando transcurrido un mes desde su presentación no ha sido resuelta...”.*

Conforme al sentido de la norma, se encuentra por fuera de discusión que reclamar previo al inicio del litigio, era una obligación del polo activo frente a Colpensiones por la naturaleza jurídica de ésta, la que sólo podría ser parte de esta controversia judicial, si previamente se le formuló la reclamación administrativa, con el pedimento de lo que hoy se pretende en el proceso impulsado. Esto, con el exclusivo fin de que tenga oportunidad de pronunciarse previamente sobre el derecho pretendido por el interesado, ya sea reconociéndolo o negándolo, constituyéndose la mentada reclamación en un factor de competencia de ineludible cumplimiento (al respecto ver la sentencia de la Corte Constitucional C-792 de 2006).

Con base en tal precisión, se verificó con detalle el expediente, encontrando que en efecto la parte activa remitió a Colpensiones una reclamación de

sustitución pensional a través de los formularios destinados para tal fin por la entidad, recibida el 16 de diciembre de 2019 (Págs. 67-75 Archivo 03); sin embargo, no se cuenta con el escrito que detalla los fundamentos de lo pedido ni se relaciona el nombre de la persona causante que origina esta solicitud. De la comunicación de la demandada que data del 17 de diciembre de 2019 donde se da respuesta a la petición radicada (Archivo 14), se denota que la prestación se suplica con ocasión de la muerte de Margarita María Loaiza Gálvez, lo que igualmente se desprende de los hechos y pedimentos de la demanda donde se realiza la solicitud en los siguientes términos: *“que se condene a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES- a pagar la sustitución pensional en un 100% en favor de la señora ADRIANA LUCÍA LOAIZA GÁLVEZ con ocasión del fallecimiento de su hermana la señora MARGARITA MARÍA LOAIZA GÁLVEZ en su condición de hermana dependiente”*.

A partir de lo previo y atendiendo la respuesta de Colpensiones de donde se aclara el panorama en cuanto a que la calidad de pensionado la ostentaba el señor Julio Ernesto Loaiza Osorio - *padre de la fallecida y la peticionaria*- y fue en virtud de su muerte que Margarita María Loaiza Osorio adquirió la prestación en sustitución como su beneficiaria en los términos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, lo que igualmente se corrobora del acto administrativo N° 8461 del 16 de junio del 2000 que otorgó este beneficio pensional (Págs. 32-34 Archivo 03); el Juzgado acudió al deber interpretativo que el legislador impuso a los jueces - *artículo 42 CGP, numeral 5-*, de donde extrajo que lo perseguido en esta oportunidad por Adriana Lucía Loaiza es la sustitución pensional de su padre Julio Ernesto Loaiza de quien se derivó el derecho pensional de Margarita María Loaiza Gálvez, pues solo respecto del primero se predica la condición de pensionado en el estricto sentido impuesto por la disposición normativa que prevé los requisitos de la pensión de sobrevivencia - *artículo 46 Ley 100 de 1993-*, y es en esa línea que se ventiló la imposibilidad de perseguir la prebenda pensional por cuenta de la muerte de Margarita María Loaiza quien no funge como causante sino como beneficiaria, estando por fuera del contexto normativo obtener una prestación por muerte originada de una sustitución pensional.

Pero es que acudiendo al escrito de demanda y a las pruebas arribadas a este trámite, logra desprenderse que la intención clara y patente de la demandante es perseguir el derecho pensional en virtud de la muerte de su hermana Margarita María Loaiza, apoyada en un dictamen de PCL que definió su estado de invalidez desde el 20 de agosto de 2014 (págs. 19-25 Archivo 03), estando enfocada toda la defensa en estos supuestos y no otros, por lo que la interpretación que pretende imponer la Juez de Instancia, excede sus deberes en tanto el contenido es sumamente claro y manifiesto, de donde no surge duda de la intención que motivó este trámite, por lo que no es posible permitir que se modifique el rumbo de la controversia por anticiparse la falladora a las resultas del proceso pues ello da lugar al denominado defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto (Ver STL4968 de 2021). Y es que la interpretación tiene cabida cuando se esté ante confusos fundamentos de hecho en relación con las pretensiones donde si no existe intervención del Juez no se da la posibilidad de decidir de fondo el asunto, pero lo que hoy compete a la autoridad judicial se encuentra expuesto de una manera tal que el desarrollo y adelantamiento del proceso es posible, por lo que la exigencia irreflexiva que la reclamación administrativa debió efectuarse en los términos en que fueron mutadas las pretensiones del líbelo, no resulta ligado al debido proceso que prevé el artículo 29 superior, el cual ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como el conjunto de garantías que tiene por fin sujetar las actuaciones de las autoridades judiciales y administrativas a reglas sustanciales y procesales específicas.

Así, como Colpensiones tuvo la oportunidad de pronunciarse respecto de la prestación que fue puesta en debate es que se derruyen los argumentos de la Juez al decidir sobre la excepción previa propuesta, ante lo cual la entidad contó con la oportunidad extraprocesal de dar definición al asunto, lo que conlleva a que la reclamación que la norma adjetiva exige como pauta imperativa y necesaria se halle satisfecha, conllevando a que la decisión revisada por apelación sea revocada para en su lugar declarar no probada la excepción que a su vez implica la continuidad en el trámite.


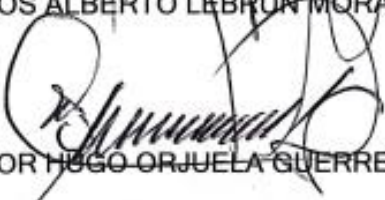
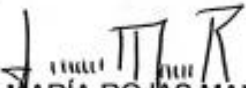
Sin costas por la forma en que fue resuelta la alzada.

### DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, **REVOCA** el auto venido en apelación de fecha y procedencia conocidos, para en su lugar declarar no probada la excepción de “FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA FRENTE A LA PRETENSIÓN DE PENSIÓN DE INVALIDEZ” y disponer la continuación del trámite.

La presente decisión queda notificada en los ESTADOS ELECTRÓNICOS.

Los Magistrados,

  
CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES  
  
VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO  
  
SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

Certifico: Que la sentencia anterior fue notificada por  
ESTADOS N° 85 fijados el 19 de mayo de 2023  
en la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

---

El Secretario.